

# Editorial

## *Inseguridad medioambiental: un estilo de vida nacional insostenible*

La erupción del volcán de Santa Ana y dos breves, pero intensos, periodos consecutivos de lluvia, a raíz de dos huracanes que azotaron la región, pusieron de nuevo en evidencia la vulnerabilidad medioambiental del país. La exposición de la región a huracanes, tormentas tropicales, terremotos y erupciones, y sus consecuencias están fuera del control humano. Esta no es, por lo tanto, la cuestión, sino la fragilidad de El Salvador —compartida con los otros países de la región. Esa vulnerabilidad magnifica el impacto de estos fenómenos naturales. La combinación de la erupción y las lluvias intensas sacaron a la luz pública, nacional e internacional, cuán inerme se encuentra el país, pese a los esfuerzos de los gobiernos de ARENA para presentarlo como moderno y sólido. Así, a las inseguridades jurídica, económica y ciudadana, ya conocidas y aceptadas, se agrega la inseguridad medioambiental.

En efecto, la inseguridad medioambiental se ha hecho patente de forma tan abrumadora que, contrario a sus reacciones primarias, con las cuales intentó restarle importancia, el gobierno de ARENA ha tenido que reconocer la necesidad de la ayuda internacional, pues carece de la preparación y de los recursos técnicos y financieros necesarios. La conjunción de estos dos fenómenos naturales —una erupción y lluvias muy copiosas—, desde una perspectiva hasta ahora ignorada, la medioambiental, ha puesto en sordina el discurso gubernamental sobre las supuestas ventajas que el país ofrece a la inversión extranjera. No es simple casualidad que los capitales nacionales buscan otros sitios “más seguros” para invertir. Vistas en su conjunto, las inseguridades jurídica, económica, ciudadana y medioambiental desvelan un país que vive de las apariencias y de la autocomplacencia. Mientras la realidad nacional no sea reconocida en toda su crudeza, las propuestas de solución que se presenten presuponen un punto de partida falso. Por consiguiente, de antemano, están condenadas al fracaso.

## 1. La “revancha” del medioambiente

La ciudad de San Salvador no necesita de ningún huracán para colapsar, las lluvias intensas son suficientes para paralizarla. Tanto así que, ahora, los pronósticos meteorológicos que anuncian lluvias son observados con recelo. El primer huracán, justo cuando la temporada comenzaba, fue anunciado con un despliegue insólito, no exento de cierta morbosidad periodística. Pero “Adrián” no llegó. Más tarde, se hicieron sentir los efectos indirectos de una combinación de varios huracanes y depresiones tropicales, los cuales revelaron el descuido en que el gobierno, tanto central como local, ha mantenido la infraestructura de la capital y del país entero. A ello se sumó la erupción del volcán de Santa Ana, en cuyas faldas vivían varios miles de personas. Ante la amenaza de “Adrián”, el presidente Saca se presentó como el líder nacional indiscutido. La imagen proyectada fue la de un ejecutivo preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Las proporciones del impacto se pronosticaron de incalculable devastación. Sin embargo, el huracán se desintegró antes de tocar las costas salvadoreñas. El juego publicitario es muy distinto a la realidad. En sus primeras comparecencias ante la prensa y la opinión pública, después de los primeros impactos de la erupción y las lluvias, ese mismo ejecutivo se presentó impotente, sobrepasado por la emergencia —tan desbordado por las aguas como la capital y el país entero— y sin propuesta. Las repetidas inundaciones de finales de septiembre y comienzos de octubre recordaron a los olvidadizos que, justo al lado de la capital moderna y rutilante de grandes avenidas y fastuosos centros comerciales, convive otra ciudad subdesarrollada y en abyecta miseria y más allá de ella, un país pobre y desprotegido. Las vidas humanas perdidas, la mayoría de niños, debidas a los deslizamientos de tierra y a las inundaciones, cuestionan ese sorprendente país del que tanto habla el discurso gubernamental.

Mientras San Salvador se inundaba, el gobierno central y los gobiernos locales de la zona metropolitana continuaron su antigua disputa sobre la responsabilidad del mantenimiento del sistema de drenaje. Desde el comienzo de su mandato, ya hace casi año y medio, el presidente Saca y el alcalde de la capital no se habían vuelto a reunir para discutir la precaria infraestructura de San Salvador y de los municipios aledaños, pese a que el primero, en aquel entonces, prometió colaborar con el segundo. Pero al final, pesaron más los intereses partidarios del presidente y del alcalde. De la segunda reunión no sacaron mucho. Decidieron crear una comisión más para estudiar la cuestión, aunque los estudios existen desde el año 2003 y el gobierno debiera conocerlos. Ahí se explica con claridad que las lluvias intensas provocarían inundaciones. Ahí se sostiene que en la medida en que la construcción de zonas residenciales, centros comerciales y vías de comunicación selle el suelo e impida la filtración del agua, ésta correría, caudalosa e impetuosa, hacia las partes bajas de la ciudad. Muchos de sus drenajes naturales están obstruidos por toda clase de desechos sólidos, una buena parte de ellos han sido embovedados para construir calles y parques encima de ellos y algunos han sido simplemente clausurados. La cantidad de agua que cayó fue, sin duda, excepcio-

nal. En este hecho se apoya la "tesis del diluvio" del gobierno de ARENA. Ahora bien, su impacto pudo ser bastante menor, si la capital y el país contara con la infraestructura adecuada y con una cultura de prevención consolidada. Estas carencias sólo son explicables por la desidia y el desinterés. Los deslizamientos y las inundaciones no son un capricho de la naturaleza, sino una consecuencia directa de la acción irresponsable de las empresas constructoras y del gobierno. Es cierto que, en los últimos años, no había llovido de una forma tan copiosa; pero este no es un fenómeno raro en la región. Al contrario, en esta época del año, siempre ha caído mucha agua. La diferencia estriba en que la construcción descontrolada y desordenada de edificios y vías de comunicación ha llevado la vulnerabilidad existente al extremo.

La población, si duda, necesita ser instruida, y motivada, para no obstruir los desagües; pero ésta no es la solución a un problema cuya dimensión es estructural. De todas maneras, pocas semanas antes de las lluvias, un ministro osó introducirse en uno de estos desagües para dar por inaugurada la limpieza de los mismos. La campaña gubernamental, sin embargo, no trascendió a las imágenes difundidas por la prensa. Responsabilizar a la población por este descuido y por su ignorancia, no exime al gobierno de la suya. Aparte que a éste le corresponde velar para evitar tal descuido y también por la educación general de la ciudadanía. La vivienda precaria de miles de familias de escasos recursos, que viven en riesgo constante, tanto en la zona metropolitana como en las márgenes de los ríos y en las costas, tampoco es una decisión libre, ya que no tienen alternativa. La pobreza las empuja a la precariedad y al peligro. Siempre han sabido que juegan con la tragedia, en una zona de alto riesgo. La construcción imprudente



de vías de comunicación, urbanizaciones y centros comerciales es también responsabilidad directa del gobierno que las promueve, las financia o las autoriza. Su responsabilidad es todavía mayor por la autoridad detentada y porque sus decisiones atentan contra el medioambiente. La mayoría de los deslizamientos tuvieron lugar en las vías de comunicación; paradójicamente, en algunas de las recién inauguradas y publicitadas como señal indiscutible de desarrollo. No obstante, sus diseñadores no prestaron atención a los cortes del terreno. A la antiguas, no les han dado el mantenimiento apropiado, pese a que los deslizamientos son frecuentes en ellas.

El Comité Nacional de Emergencia se vio sobrepasado por la doble crisis de la erupción del volcán de Santa Ana y las inundaciones. Cambiarle de nombre no aporta solución alguna, puesto que carece de estructuras ágiles y eficaces —por ejemplo, desautorizó los primeros desplazamientos de las familias que abandonaron las faldas del volcán por iniciativa propia, temerosas de una erupción, que se anunciaba como inminente y que, en efecto, ocurrió poco después—, adolece de información precisa y rigurosa para orientar a la población y sobre todo a la prensa, y la ayuda que presta a los damnificados es insuficiente y tiende a revestirse de color político partidario, pues prefiere a las comunidades leales a ARENA que a la ciudadanía como tal. Se aprovecha de la facilidad con la cual alimentos, medicamentos, ropa y dinero pueden ser manipulados por la propaganda política. De hecho, ayuda destinada a las alcaldías por el Comité de Emergencia Nacional fue a parar a bodegas de los candidatos de ARENA, quienes la distribuyeron como parte de sus actividades electorales. La tentación es tan fuerte que ni siquiera el FMLN se pudo librar de ella. En esto, como en otros puntos, sus coincidencias con ARENA son asombrosas. El gobierno mismo justificó la manipulación partidaria de la necesidad de la población, con lo cual legitimó el abuso y humilló a una población inerme. Por eso, con cierta frustración, la gente reclamó una asistencia que no recibió con la urgencia del caso o incluso que le fue negada. Pasada la crisis, el Comité de Emergencia Nacional comenzó a suspender la asistencia a los damnificados, aun cuando los que aún permanecían en los refugios no tenían sitio seguro a dónde dirigirse. Al igual que en otras emergencias, las organizaciones privadas, en particular las religiosas, y las comunidades hicieron más que el gobierno.

A autoridades como las del Ministerio de Gobernación y del Comité de Emergencia Nacional les resulta fácil ordenar la evacuación de las zonas de alto riesgo, pero para sus habitantes es una decisión muy difícil, porque no tienen a dónde ir y las alternativas que les ofrecen no son confiables para ellos. Algunas familias prefieren arriesgar su seguridad y, en consecuencia, no abandonan su vivienda, temerosas de perder sus escasas pertenencias. Aquellas que, junto con su vivienda pierden lo poco que poseen, deben comenzar de cero con sus propios recursos, lo cual supone ingentes sacrificios adicionales. Los refugios para albergar a los damnificados son improvisados y, por lo tanto, insuficientes y no reúnen las condiciones mínimas. En contraste, en una circunstancia similar, pero de mucho mayor peligro, el gobierno cubano movilizó a más de 400 mil personas a refugios asignados de antemano y debidamente provistos.

La postura gubernamental ante los recursos internacionales resulta aún más incomprensible. En un primer momento, el gobierno de Saca la despreció y pensó que podría enfrentar la crisis con recursos propios. Esta postura, sensata en apariencia —no pedir aquello que no es necesario— tenía mucho de orgullo absurdo. Pedir ayuda a la comunidad internacional implicaba reconocer la improvisación y sobre todo que, pese a ser El Salvador un país con una renta media, ésta está distribuida de una forma muy desigual. Pero la profundidad y la extensión del impacto de la erupción y las lluvias fue tal que perdió el control de la emergencia y tuvo que reconocer que necesitaba ayuda de la comunidad internacional, excepto las de Venezuela y Cuba. No aceptó la ayuda de especialistas venezolanos en evaluación de catástrofes y en su gestión, en atención de emergencias médicas y en asistencia a damnificados, pese a que aún no podía valorar las consecuencias del desastre. Tampoco aceptó los médicos cubanos con el especioso argumento de que el país no los necesitaba. Contradictoriamente, poco después, el Ministro de Salud Pública reconoció que la situación sanitaria de algunos refugiados era inadecuada y que algunos damnificados enfermos exigían atención. En estas decisiones, privó el temor a que la presencia de venezolanos y cubanos fortaleciera al FMLN, en una coyuntura electoral. De nuevo, el gobierno de ARENA dio prioridad a sus mezquinos intereses partidarios sobre las necesidades de miles de salvadoreños damnificados.

De esta visión miope de la realidad nacional, compartida por la mayor parte de la prensa nacional, la cual se regodeó en la tragedia y el sufrimiento, no se puede esperar mucho. Ya que el gobierno de ARENA no puede o no quiere ver más allá de lo inmediato —no le fue fácil visualizar la envergadura del daño causado en la infraestructura de la zona metropolitana, las márgenes de los ríos y las costas, los costos económicos y sociales de la reubicación de la población en alto riesgo y de la vivienda segura y digna, que les ha prometido, ni tampoco las pérdidas en la economía de subsistencia—, la prensa, en vez de mostrarse complaciente, debiera ayudarlo con sus preguntas y forzarlo así a enfrentar la realidad en toda su complejidad y crudeza, a recapacitar sobre sus errores y mezquindades y a buscar una solución verdadera. Sin embargo, las inquietudes de la mayor parte de la prensa se centraron en cuestiones superficiales como la velocidad de los vientos, la saturación de los suelos o la cantidad de agua caída, o también en alguna tragedia personal, pero este interés era movido más por la curiosidad que por su significado humano. La “protección divina”, a la cual se encomienda con frecuencia el gobierno de ARENA, sería mucho más eficaz si éste no se contentara con “algunas medidas de seguridad y alerta temprana” y se impusiera como prioridad tomar en serio, de una vez por todas, al medioambiente. No deja de ser una ironía cruel que, en unas circunstancias tan graves, enfatice el lema que proclama que El Salvador es “un país seguro para progresar en paz”. La erupción y las inundaciones han demostrado lo contrario. No sólo la violencia social es fuente de inseguridad, sino que también lo es, y en gran medida, la irresponsabilidad con la que la sociedad y el Estado salvadoreños han tratado y tratan su entorno natural.

No obstante ser la tierra y el agua sus dos recursos más valiosos, los ha gestionado de forma tan débil que El Salvador es hoy uno de los países con uno de los medioambiente más degradados. En efecto, los cambios experimentados en el uso del suelo y del agua, más el consumo creciente de petróleo y la enorme dependencia de la generación de energía termoeléctrica aumentan con rapidez las emisiones de gases de efecto invernadero. La contaminación del aire es severa, en particular en la zona metropolitana. San Salvador es, de hecho, la ciudad más contaminada de la región centroamericana. Existen vacíos en la normativa sobre los vertidos y las emisiones, las instituciones responsables del medioambiente tienen pocos recursos y poder como para imponer la legislación actual a los grupos económicamente poderosos. Los cambios climáticos provocados por esta actitud irresponsable que trata el medioambiente como un bien inagotable, crearán cada vez dificultades más grandes e irreparables en los ecosistemas, el agua, el nivel del mar y la salud pública.

Las proyecciones de los modelos climáticos indican un aumento de la temperatura en todos los meses, sin modificación de la estructura del patrón de variación anual. Este cambio reducirá aún más el bosque existente. Las plantaciones también serán afectadas por la variación de la precipitación. Una disminución de la productividad de las cosechas tendrá impacto negativo inmediato en los niveles de desnutrición, educación y pobreza, pues la reducción de la producción de granos básicos supone menos empleo y aumento de precios. El deterioro de la dieta influye en la mortalidad, la morbilidad y la esperanza de vida. En un siglo, la costa salvadoreña podría llegar a perder un área de territorio importante. Cuando esto ocurra, la intrusión salina en los mantos acuíferos de la costa y la contaminación de los pozos causarán daños en la agricultura. Por otro lado, el cambio climático crea situaciones ideales para el desarrollo de epidemias —dengue, leptospirosis, cólera, infecciones intestinales y deficiencias en las vías respiratorias. Las lluvias torrenciales dejan agua estancada o criaderos de zancudos y de otros insectos, expulsan a los roedores de sus madrigueras y contaminan las fuentes de agua. Con todo, la producción de gases de efecto invernadero del país es insignificante, ya que Estados Unidos y los otros países industrializados son responsables de la producción del 90 por ciento de dichos gases. Por consiguiente, El Salvador, al igual que la mayoría de los países del ser, se aproxima a una nueva catástrofe, sin haber contribuido a ella de forma significativa. Ante esto, los países industrializados no sólo se muestran indiferentes, sino que, además, responsabilizan a quienes menos contaminan.

El descuido del medioambiente se ha cobrado una especie de “revancha”, en este año, la cual también puede ser interpretada positivamente como una advertencia seria para revisar el estilo de vida. Aun cuando es indispensable emprender labores de mitigación y prevención, en aquellas zonas más vulnerables y, por lo tanto, donde el riesgo es mayor, las tareas no terminan con ellas. La degradación del medioambiente exige intervenciones estructurales, las cuales obligan a cambiar los patrones de vida —o la cultura. La población, con su olfato agudo,

desarrollado en su lucha a muerte por la supervivencia, sabe que se encuentra abandonada y que su situación, en lugar de mejorar, irá a peor. Por eso, tiene puesta su mirada en el norte, hacia donde la mitad de ella desea emigrar. Más allá de eliminar los riesgos más visibles, el desafío que tanto el país como su gobierno, pero sobre todo sus dirigentes políticos y económicos tienen planteado, es cómo hacerlo habitable.

## 2. Interpretaciones erradas

Las inundaciones y los deslizamientos causados por las lluvias y la erupción del volcán son atribuidos a Dios y a la naturaleza por el gobierno de ARENA y, hasta cierto punto, por la mayoría de los medios de comunicación de masas. Dios sería responsable de lo ocurrido, por crear de manera imperfecta, pues habría hecho un país en un sitio de alto riesgo, sometido a terremotos, inundaciones, huracanes, erupciones, deslizamientos, etc. Asentados en las proximidades de una de las placas de subducción del planeta y rodeados de volcanes, montañas y ríos, a sus habitantes no les quedaría otra alternativa que construir sobre un suelo inestable o en las faldas de esas elevaciones o en las orillas de quebradas y ríos. Dios los habría destinado a la vulnerabilidad y al riesgo constante. En estas condiciones, la naturaleza no haría otra cosa que cumplir el papel asignado por Dios. Es así como, según esta interpretación errada, el país vive desde siempre bajo el riesgo y, dado que esa es voluntad divina, se debe acostumbrar a este estilo de vida. Sólo faltó afirmar que es un castigo divino por ser pobre. Por la cuenta que le trae, el gobierno de ARENA rechaza con insistencia toda averiguación para establecer las verdaderas responsabilidades de lo ocurrido, de la misma manera que se ha negado a pedir cuentas del impacto de los terremotos de 2001 y también de las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos, cometidas antes de 1992 y de casi todo los crímenes posteriores. Según este gobierno, no habría responsables. El argumento es bien conocido: como todos seríamos responsables, nadie es responsable. En vez de pedir responsabilidades, los gobiernos de ARENA, desde hace más de quince años, proponen la resignación con la suerte que le habría tocado a cada uno, asumir las pérdidas y volver a comenzar con la mirada puesta en unas expectativas equívocas, sino falsas.

Sorprende que el gobierno, ARENA y los medios de comunicación se preocupen ahora por Dios, cuando lo han tomado en serio. Ciertamente, nunca han tomado en serio al Dios de Jesús y de Monseñor Romero, es decir, al Dios de la justicia, que profetiza contra el explotador, y de los pobres, que sale en su defensa. No es que no se pueda preguntar por Dios cuando ocurre una catástrofe. De hecho, la pregunta por Dios ante el mal del mundo es tan antigua como la humanidad misma. Desde siempre, ésta se ha preguntado por qué sufre, si Dios es equitativo. Esta fue la pregunta de Job, cuyas quejas fueron introducidas en el Antiguo Testamento. Así lo han hecho los filósofos como Epicuro, en el mundo griego, y Voltaire, a propósito de la devastación causada por el terremoto de Lisboa de 1775. La pregunta es muy humana y muy cristiana. Pero tratar la



cuestión tal como lo ha hecho el presidente Saca —“los salvadoreños hemos sido creados para la adversidad”— es una insensatez. La naturaleza tiene limitaciones y, a veces, es ambigua. Su potencial puede ser utilizado para el bien —la luz y el calor solar, la fuerza del viento y de las

mareas, etc. Pero esa energía puede desbordarse y devastar, en terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas. El mismo Dios creador ha dotado a la humanidad con la inteligencia para encauzar, reducir su poder destructor y maximizar su potencial constructivo. Según la fe, de Dios proviene la llamada radical a la responsabilidad para prevenir las posibles consecuencias de las catástrofes, para aliviar las emergencias y para construir estructuras que garanticen la seguridad. Cuando la inteligencia y los recursos no se ponen a producir en esta dirección, es porque, en definitiva, los desastres no dañan mucho a los poderosos y porque se trata de defender a los pobres de la adversidad. Esto sí es un pecado contra Dios.

Achacar sin más la responsabilidad del desastre último a Dios, es ocultar la irresponsabilidad con la que se han construido urbanizaciones, centros comerciales y vías de comunicación, una explicación que el gobierno de ARENA evita, cada vez que es cuestionado. Los gobiernos locales ni siquiera se ocupan de la cuestión. La misma debilidad institucional, evidente en la ausencia de una normativa eficaz, de ordenamiento territorial y de ordenamiento del desarrollo urbano, también responsabilidad gubernamental, es otro factor que explica lo sucedido. Los gobiernos de ARENA —y los gobiernos locales, en su jurisdicción— han mirado con indiferencia el surgimiento de núcleos de poder informal, que han sustituido sin mayor obstáculo la organización social y jurídica del Estado. La debilidad institucional es responsabilidad del poder ejecutivo, con su presidente a la cabeza, de los otros poderes, de los gobiernos locales y de algunas empresas constructoras, cuyas prácticas no son controladas, ni tampoco sancionadas, cuando violan la ley o producen muertes y perjuicios. Miles de familias salvadoreñas viven en zonas de alto riesgo, no por voluntad divina, sino porque no tienen alternativa. La vivienda segura y accesible les ha sido negada. No son sujetas de crédito, ni los programas de vivienda del gobierno las consideran beneficiarias. Sus miembros no tienen empleo permanente y si lo tienen, sus ingresos a duras penas les permiten adquirir lo más indispensable. Para reunir sus pocas pertenencias, han hecho

grandes sacrificios. La pérdida de sus viviendas y de sus pocas posesiones significa más miseria. Estas familias no viven en estas condiciones por voluntad propia o por negligencia, sino porque han sido forzadas a ello con mecanismos diversos.

Achacar a Dios los desastres es renunciar a la seguridad medioambiental, puesto que, sin conocer con precisión las variables que los producen, en la práctica, es imposible dar con una respuesta adecuada. Asimismo, es usar su nombre en falso, pues su invocación es utilizada para encubrir la propia responsabilidad, la ambición desmesurada por la riqueza y el poder, y el desinterés por la ciudadanía, de cuyo bienestar se han hecho cargo. Sin duda, la mano de Dios es poderosa, pero no necesita poner a prueba a los seres humanos para comprobar su capacidad o su habilidad, tal como presupone el presidente Saca. La relación de Dios con el ser humano no es un concurso de pruebas con premios para los más fuertes o los más diestros. Dios, por ser poderoso, pero sobre todo por ser bondadoso y compasivo, no necesita poner a prueba a nadie para saber lo que hay en el fondo de su corazón. Lo sabe sin necesidad de prueba alguna. Eso sí, le ofrece muchas oportunidades para rectificar y ordenar su vida de acuerdo a su voluntad. En cualquier caso, lo que se encuentra en el fondo del corazón humano está manifiesto en las actitudes hacia los demás y hacia la naturaleza. El desprecio a la vida humana y a la creación es evidente, sin necesidad de un desastre como el recién pasado. No es Dios el que ha organizado mal la creación, son los seres humanos los que han introducido el desorden en ella, llevados por la ambición.

---

El descuido del medioambiente se ha cobrado una especie de “revancha”, en este año, la cual también puede ser interpretada positivamente como una advertencia seria para revisar el estilo de vida.

---

Tampoco es cierto que los salvadoreños hayamos superado siempre esas presuntas pruebas divinas, tal como sostiene el presidente Saca, en su afán por dar una esperanza que, dado el contexto, es hueca. El descuido de los gobiernos de ARENA del medioambiente y su indiferencia ante los diversos riesgos no pueden interpretarse como una “prueba superada”. Las vulnerabilidades que el huracán “Mitch” y los terremotos de 2001 dejaron en evidencia no fueron corregidas. El anteproyecto de ley de ordenamiento territorial, muy criticado, por cierto, no ha sido discutido aún. Diversas obras de mitigación quedaron sin concluir y otras fueron omitidas. Aun cuando los presupuestos para ejecutar estas obras son millonarios, el gobierno de ARENA no puede argumentar falta de fondos. Desde hace varios años, tiene concedidos dos préstamos por casi 30 millones de dólares para evitar inundaciones, construir vivienda temporal, habilitar caminos rurales y la carretera Panamericana, remover escombros, preservar Las Colinas (Santa Tecla), abrir el desagüe del lago de Ilopango, promover el café y la micro

y pequeña empresa, y reparar el sistema de agua potable, hospitales y unidades de salud. Ninguna de estas obras ha sido ejecutada aún. Sólo se ha ejecutado el 7 por ciento de los dos préstamos, aun cuando el país paga intereses por ambos. De hecho, estos préstamos comenzaron con mal pie, pues fueron aprobados con casi cinco años de retraso, lo cual obligó a modificar su destino varias veces, pues aparecieron nuevas necesidades. El retraso de su aprobación se debió a falta de información básica sobre el estado del medioambiente, a ausencia de una institucionalidad mínima de ejecución y al cambio de legislatura (2001). Entre una cosa y otra, el primer desembolso fue hecho trece meses, en 2003. A mediados de 2004, uno de los bancos multilaterales calificó la ejecución de los préstamos como insatisfactoria. Por su lado, los gobiernos de ARENA nunca han informado sobre su ejecución, ni sobre el paradero de los fondos. La experiencia reciente arroja dudas razonables sobre la capacidad del gobierno de Saca para emprender y concluir las obras de mitigación y prevención. De momento, los préstamos no han sido reorientados por el mandatario, sino que éste simplemente ordenó su ejecución. La incapacidad de los gobiernos de ARENA para ejecutar la inversión pública es proverbial y ella no está relacionada con el retraso en la aprobación del presupuesto nacional.

El presidente Saca asegura que “no puede estar tranquilo ante las necesidades de la gente”. Pero estas necesidades han estado ahí desde que asumió la dirección del gobierno, cuando hizo las promesas de la campaña electoral y desde que ARENA monopolizó el poder. Si en el tiempo que lleva como mandatario se hubiera acercado a la población y hubiera entablado con ella un diálogo humano —y no publicitario—, tal como prometió, pronto hubiera descubierto esas necesidades y tal vez se hubiera ocupado de ellas y, en consecuencia, hubiera ordenado a su gobierno, tal como le gusta hacerlo, ejecutar los préstamos para prevenir y evitar tantas pérdidas y tanto sufrimiento. Si realmente hubiera visto los rostros adoloridos de la población, su gestión hubiera adquirido otro rumbo. Eso de que el suyo es “un gobierno con sentido humano” es un decir, que forma parte de su campaña publicitaria permanente, con cuya imagen oculta la dureza de la realidad nacional, y detrás de ella encubre también a los sectores que se benefician de su gestión. Un verdadero sentido humano hubiera llevado a su gobierno a proporcionar seguridad social y medioambiental a la ciudadanía. Aunque nunca es tarde para “darle dignidad a las personas”.

El discurso presidencial sobre las inundaciones concluye con un llamado a la solidaridad, pero el pueblo salvadoreño no necesita de esta clase de llamamientos. Ya es bastante solidario cuando se enfrenta a estas tragedias, tal como lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Su generosidad es grande. Lo que el pueblo salvadoreño necesita, pero se le niega de forma sistemática, son medios para institucionalizar esa solidaridad y así garantizar la vida y el medioambiente. Lo que el pueblo salvadoreño necesita es fortalecer la organización local y comunitaria, así como establecer mecanismos para compartir. La colaboración principal no debe pedirla el presidente Saca a quienes tiran basura en las alcantarillas y quebradas, ya que no tienen dónde depositarla y carecen de educación elemen-

tal; sino que debe pedírsela a los responsables de la enorme desigualdad económica del país, puesto que ellos tienen poder para decidir una seguridad ciudadana más eficaz y también poseen los recursos para financiarla.

Más allá del esfuerzo gubernamental por ocultar la realidad y escabullir su responsabilidad, subyace el cultivo de la pasividad entre la población. Una porción respetable de ella piensa en los mismos términos del gobierno: Dios sería responsable de las calamidades y, por ende, también del sufrimiento. Ante su voluntad inapelable, no queda más que la resignación y la conformidad. Cualquier otra actitud que no sea soportar con fortaleza las pérdidas e incluso la muerte, sería inútil. Con certidumbre sorprendente, los más audaces encuentran la predicción de estas catástrofes en la Biblia. La precisión de la predicción sería advertencia sobre la inutilidad de la acción humana para prevenirlas. Por otro lado, el sufrimiento, ocasionado por las pérdidas, obedecería a planes divinos, cuyo propósito sería poner a prueba a los seres humanos o purificarlos de sus pecados. El cristiano fiel se doblega ante esta voluntad divina sin protestar. Los predicadores de calamidades hacen un buen servicio al gobierno de ARENA y a los verdaderos responsables de las tragedias nacionales. Es cierto que también proporcionan conformidad y aceptación entre bastantes de los afectados, pero también un sometimiento y un sufrimiento que sólo puede ser interpretado como complacencia con la injusticia humana. Con todo, es necesario reconocer que la explicación última del mal y del sufrimiento son parte del misterio.

### 3. Falso compromiso empresarial

No es el sufrimiento de la población, ni un sentido genuino de solidaridad o de humanidad lo que mueve al gobierno de ARENA. Tampoco ha mostrado



mayor interés en “formar equipo”, tal como reza el lema de la nueva campaña electoral. Ciertamente, no formará equipo con la población, a la cual siempre ha considerado como agente pasivo de sus acciones. El presidente Saca no ha sido la excepción. Al igual que sus antecesores, dio un papel preponderante a la gran empresa privada organizada para distribuir la ayuda recibida por el gobierno, dada su presunta eficiencia y transparencia. Pero los hechos revelan que ninguna de estas dos virtudes es característica destacada de la empresa privada salvadoreña. Las lecciones dejadas por los terremotos de 2001, respecto a su participación, en la distribución de la ayuda, tampoco fueron aprendidas por ninguno de los dos. En aquella ocasión, el gobierno de ARENA intentó centralizar la ayuda recibida, incluso la privada; pero se vio obligado a dar marcha atrás. En esta ocasión, las pretensiones centralizadoras tampoco fueron muy lejos.

La gran empresa privada organizada ha vuelto a demostrar que no puede manejar una crisis nacional. La razón es muy simple, no está preparada para ello. No es lo mismo dirigir o administrar una empresa, que una emergencia nacional. Su transparencia no es tan evidente como parece, tal como demuestran los estudios sobre la administración de sus negocios, la rigurosidad con la que paga sus impuestos y cumple obligaciones laborales, y las prácticas de la competencia y del mercado libre. Algunas de estas grandes empresas hicieron donativos al gobierno para atender a los damnificados, en medio de gran despliegue publicitario, lo cual revela que su interés era más la publicidad que mostrar su solidaridad. Por otro lado, las cantidades donadas eran relativamente insignificantes para sus abultadas operaciones y ganancias. Con toda probabilidad, una buena proporción de esos donativos provino de las contribuciones forzadas de sus empleados, tal como es práctica usual en estas empresas, a propósito de otras actividades para recaudar fondos e incluso para financiar las campañas electorales de ARENA. Habría, pues, que distinguir entre el aporte de los empleados y el de los propietarios, quienes, además, deducen estas contribuciones de sus impuestos. Más sorprendente aún, algunas de las asociaciones y algunos empresarios en particular tienen tan poca confianza en sus colegas que prefirieron entregar sus contribuciones directamente a organizaciones privadas y, por lo general, sin publicidad.

No deja de ser irónico que quienes más han medrado con la depredación del medioambiente, aparecieran luego al frente de la distribución de la ayuda a los damnificados e incluso se atrevieran a pedir a los pobres una contribución con otros tan empobrecidos como ellos. En fin, quizás el destacado papel que el gobierno de ARENA dio a la gran empresa privada organizada no se trate de eficiencia, ni tampoco de transparencia, sino de aprovechar las circunstancias para presentarse ante la opinión pública como socialmente responsables y, de esta manera, lavar su imagen y esconder su responsabilidad.

La tendencia centralizadora desembocó en la militarización de los albergues y de la distribución de la ayuda oficial. Pronto se descubrió que los militares tampoco estaban preparados para gestionar una emergencia nacional, ni para tratar con los civiles. Los soldados intentaron convertir la vida de los refugios en cuarteles, regidos

por la disciplina militar; decidieron de forma arbitraria sobre la aceptación de ayuda privada, aun cuando había gran necesidad, y crearon cuellos de botella en la distribución de alimentos, al punto que el Programa Mundial de Alimentos encontró víveres almacenados en los cuarteles. Ante este hallazgo, el Programa de Naciones Unidas se independizó de la esfera oficial militarizada. Al final, el gobierno de ARENA decidió apoyarse en los gobiernos locales para distribuir la ayuda. Esta fluyó con mayor celeridad, pero el poder que conllevaba el control de la misma fue utilizado por varios alcaldes, sobre todo de los partidos de la derecha, para hacer proselitismo partidario y cometer arbitrariedades. En el nivel departamental, las gobernaciones, una institución política obsoleta, pero muy útil para premiar la lealtad al gobierno, una de cuyas atribuciones teóricas es atender las emergencias, también demostraron ser inoperantes, por falta de preparación. Pero, al igual que las alcaldías, no dejaron pasar la oportunidad para hacer proselitismo partidario con la ayuda recibida del gobierno central y de la empresa privada.

El gobierno de ARENA tiene más confianza en la gran empresa privada organizada y en el ejército que en la población y sus organizaciones. No obstante haber comprobado que la centralización es ineficaz y generadora de caos, y, por lo tanto, fuente de malestar social, sus tendencias autoritarias y partidistas han podido más que atender con prontitud a las necesidades reales de la población. Privilegió la centralización y la militarización por encima de la apertura, la organización social y comunitaria y los gobiernos locales, los cuales han demostrado ya ser mucho más eficaces, pese a sus fallas, que el gobierno central, los empresarios y los militares. Esta colaboración del gobierno central con las alcaldías, sin embargo, es momentánea. En ningún momento aquél ha mostrado disposición alguna para formar equipo con ellas y así prevenir y garantizar la seguridad ciudadana. Aun cuando las obras de ingeniería indispensables son de una envergadura tal que demandan la intervención directa del gobierno central, éste no debe perder de vista que también la participación activa de la comunidad organizada y del gobierno local son elementos claves del éxito. Pero el gobierno de ARENA no está preparado para esta apertura; tampoco está interesado en ella. Para él, la participación, la consulta y la discusión son obstáculos para la eficacia, es decir, para el desarrollo de sus planes. Invitar a “hacer equipo” es un lema más, efímero como todas las consignas de las campañas publicitarias. Al igual que lo ha sido el proclamado “sentido humano” del gobierno actual.

---

El discurso presidencial sobre las inundaciones concluye con un llamado a la solidaridad, pero el pueblo salvadoreño no necesita de esta clase de llamamientos. [...] Lo que el pueblo salvadoreño necesita, pero se le niega de forma sistemática, son medios para institucionalizar esa solidaridad y así garantizar la vida y el medioambiente.

---

Ante esta dura realidad, la población se moviliza de forma individual, espontánea e improvisada. De hecho, cuando pasaron los peores momentos de la crisis, en gran medida forzada por la necesidad, los damnificados comenzaron a regresar a los sitios de alto riesgo y a sus prácticas rutinarias, con lo cual alimentan las condiciones para la siguiente crisis. Las urgencias de las necesidades inmediatas hacen a un lado el miedo pasado, ayudan a olvidar la muerte de seres queridos y a soportar con estoicismo nuevos sacrificios para reponer las pérdidas materiales. A la población que se resiste a abandonar el albergue, por no tener sitio seguro a dónde dirigirse, se le niega el alimento y toda clase de ayuda con vistas a forzarla a volver al riesgo y a la inseguridad.

En una sociedad con una desigualdad tan grande, los sectores sociales más vulnerables suelen ser los de menos ingresos. La precariedad que caracteriza su vida, hace que el desastre sea una amenaza permanente, pues no tienen medios para protegerse, tal como lo hacen otros sectores con más medios económicos. De hecho, la mayoría de las víctimas de las inundaciones y los subsiguientes deslizamientos fueron menores de edad pobres. La vulnerabilidad general en la que transcurre su vida impide que puedan recuperarse con facilidad y, aun cuando lo consigan, continúan expuestos a experimentar nuevas pérdidas. Así, pues, estos sectores están forzados a asumir el riesgo sin medios, por la indiferencia y la incompetencia del gobierno, por su debilidad institucional y, aun cuando éste tuviera voluntad política para contrarrestar esa vulnerabilidad, carece de los recursos financieros. No obstante ser un país con una renta media, el gobierno salvadoreño depende de la ayuda internacional para enfrentar las emergencias, al igual que los países pobres. Peor aún, explota las calamidades para obtener fondos, donados o prestados, que luego no invierte en la población damnificada o no utiliza por mera incompetencia, mientras los dólares del capital salvadoreño son guardados a buen recaudo.

Así, pues, si bien la vulnerabilidad ambiental es más evidente cuando suceden fenómenos naturales, como las recientes lluvias o la erupción volcánica, aquella se manifiesta todo el tiempo, en enfermedades producidas por la existencia de contaminantes en el aire, el agua y los suelos. Estas enfermedades inciden más en los pobres, mientras que las fuentes de la contaminación están asociadas con las actividades propias de "la calidad de vida" de la cual sólo pueden disfrutar los más privilegiados. A la par de la desigualdad económica y social hay que agregar, por lo tanto, la desigualdad ambiental. Mientras el modelo de desarrollo se concentre en la dimensión económica y deje de lado la social y ambiental, afirmar que lo social —o ambiental, para el caso— constituye el centro de sus decisiones y actividades, tal como lo hace el discurso presidencial, no es más que demagogia.

La sociedad salvadoreña y centroamericana, pero sobre todo aquellos que tienen el poder para decidir sobre su destino, deben aceptar, como paso previo, para reducir la vulnerabilidad y garantizar la vida de sus poblaciones empobrecidas, las interrelaciones estructurales existentes entre los sistemas naturales y las prácticas sociales. Sin este reconocimiento, las obras de ingeniería no tendrán la

eficacia esperada para prevenir o mitigar. Esas interrelaciones estructurales son el fundamento del análisis de la dinámica de la vulnerabilidad —las tormentas tropicales, las canículas, las lluvias intensas, la variación de la duración de las temporadas seca y lluviosa, etc.— y de la viabilidad natural y social de cualquier forma de vida. La vulnerabilidad sólo puede ser superada cuando se conocen las variables que configuran su estructura y su dinámica. Una vez identificadas y comprendida su interacción, es necesario educar a la sociedad y también al gobierno. Entonces, las obras de ingeniería son eficaces. Ahora bien, nada de esto se puede llevar a cabo sin replantearse simultáneamente las formas de vida cotidiana, las cuales, con toda seguridad, deben ser transformadas radicalmente. Así, pues, corregir la vulnerabilidad sin alterar los estilos de la vida social e individual es desperdiciar energías y recursos, porque la vulnerabilidad persistirá o se crearán otras vulnerabilidades. De una u otra forma, la vida siempre sería arriesgada. El supuesto es que tanto la configuración natural del entorno como las prácticas sociales e individuales son fuente de vulnerabilidad ambiental. Es inútil ejecutar obras de mitigación en la cordillera del Bálsamo o en cualquiera de los sitios donde ha habido deslizamientos o inundaciones, mientras se permiten nuevas construcciones de viviendas o de vías de comunicación, en las condiciones actuales. En pocas palabras, es evidente que el estilo de vida de la sociedad salvadoreña, en todas sus dimensiones, es inviable, tal como ha quedado demostrado. La advertencia de las semanas recién pasadas debiera ser tomada muy en serio para un gobierno como el de ARENA, el cual no ejerce ningún control sobre los caprichos del poder económico, ni sobre las estrategias de supervivencia adoptadas por los pobres, pero que, al mismo tiempo, afiora la inversión extranjera y el desarrollo económico sostenible.

Desde esta perspectiva, la lista de tareas que la sociedad y el gobierno deben emprender es larga y compleja. De nuevo, el paso previo es adquirir conciencia de la importancia del uso racional y de la necesidad de conservar los recursos naturales. Por lo tanto, es indispensable promover y favorecer los procesos que reducen el impacto de la producción en el ambiente —eficiencia energética, aguas residuales, control de emisiones, reciclaje, combustibles limpios, etc. Por otro lado, es obligatorio prestar atención al manejo integral de los desechos sólidos, para lo cual hay que fomentar la investigación, el desarrollo y la adaptación de tecnología apropiada para reciclarlos y aprovecharlos. A esto hay que agregar el desarrollo integral y sostenible de las principales cuencas hidrográficas, la protección de las reservas forestales y los parques nacionales, la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de los bosques, la reducción del consumo de leña con fuentes de calor alternativas, el mejoramiento de la infraestructura de la zona metropolitana y el ordenamiento del uso de su territorio.

San Salvador, 16 de noviembre de 2005.